

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

G/ADP/W/99

G/SCM/W/108

19 de octubre de 1995

(95-3169)

**Comité de Prácticas Antidumping
Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias**

Original: español

RESPUESTA DE CHILE A LAS PREGUNTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS¹ RELATIVAS A LA NOTIFICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS DE CHILE²

Se ha recibido de la Misión Permanente de Chile la siguiente comunicación, de fecha 2 de octubre de 1995.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ESTADOS UNIDOS RESPECTO A LA NOTIFICACIÓN DEL GOBIERNO DE CHILE

Respuestas a las preguntas generales

2. Respecto de la pregunta N 2, el documento "Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas" no tiene ningún estatus legal. Ese documento tuvo por objeto servir como un medio de divulgación y sólo proporciona una descripción general acerca de las materias que son de competencia de la Comisión, las referidas a sus funciones, estructuras y condiciones necesarias para que ésta adopte una decisión destinada a corregir una distorsión.

En primer término y como cuestión previa, pedimos tener presente dos consideraciones de orden general. Chile no fue suscriptor del denominado "Código Antidumping" de la Ronda Tokio, no obstante, en 1992 su ordenamiento jurídico interno asignó a la Comisión Nacional de Distorsiones la posibilidad de recomendar medidas de esta naturaleza.

En segundo lugar, y producto de esta breve experiencia en esta materia, Chile sólo ha aplicado hasta la fecha tres medidas antidumping. Encontrándose vigente hasta el día de hoy sólo dos de ellas, producto de investigaciones originadas con anterioridad al 1º de enero del presente año. Los derechos antidumping aplicados han fluctuado en un rango de un 7 por ciento a un 10 por ciento, lo que demuestra la mesura y prudencia con que se abordan estas materias.

Finalmente, debo dejar constancia que de acuerdo con nuestras normas estas medidas sólo pueden aplicarse como máximo por un año, teniendo una cláusula de término automática, sin que sea necesario ninguna actuación formal de la administración.

¹G/ADP/W/1-G/SCM/W/9 + Supl. 1.

²G/ADP/N/1/CHL-G/SCM/N/1/CHL.

Determinación de la existencia de dumping

3. Respecto de estas materias, la Comisión de Distorsiones se guía por los criterios generales descritos en los artículos 2.3 y 2.4 del Acuerdo respectivo, los que se complementan por las facultades que, a este respecto, competen al Servicio Nacional de Aduanas, cuyo Director integra esta Comisión.
4. Cabe recordar que las disposiciones de este Acuerdo son de aplicación reciente dado que Chile no era suscriptor del Código de la Ronda Tokio. En consecuencia, desde la vigencia de estos Acuerdos, se aplica el artículo 2.5 del Acuerdo correspondiente. En todo caso, cabe señalar que a la fecha no se han producido situaciones de esta naturaleza.
- 5, 6 y 7. Cabe reiterar que éste es sólo un documento de difusión, en él se describen sus funciones, estructuras y condiciones necesarias para que la Comisión adopte una decisión destinada a corregir una distorsión. Este documento fue elaborado antes de la vigencia de los actuales Acuerdos. El artículo 2.4 es normativa vigente en relación a la comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal.
8. Chile utiliza la metodología del artículo 2.4.1 para la conversión de monedas, cuando la comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal así lo exija.
9. Desde antes de la vigencia de estos nuevos acuerdos, Chile ha aplicado los criterios contenidos en el artículo 2.2, los que hoy son ley, y rigen para determinar cuando las ventas del producto similar en el mercado interno del país exportador están hechas en el curso de operaciones comerciales normales.
10. Chile se basa en el artículo 2.2.1.1.
11. Chile utiliza los criterios establecidos en el artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping.
12. Chile utiliza las disposiciones del artículo 2.2.1 para la exclusión de las ventas bajo el costo.
13. El artículo 2.4.2 del Acuerdo es la norma en Chile sobre esta materia. De forma tal que la existencia de márgenes de dumping durante la etapa de investigación se establecerá normalmente sobre la base de una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación comparables o mediante una comparación entre el valor normal y los precios de exportación transacción por transacción. En los casos que se ha investigado a la fecha, dicho margen se ha establecido sobre la base del primer criterio.
14. Esta situación sólo se ha presentado en una ocasión, en esa oportunidad se analizó la importación de un producto similar proveniente de un país, con economía de mercado y que sea proveedor del mercado doméstico. Creemos que ese es un criterio que prevalecerá en el futuro.

Subsidios

En primer término y como cuestión previa, pedimos tener presente dos consideraciones de orden general. Chile fue suscriptor del denominado "Código de Subsidios" de la Ronda Tokio desde enero de 1981.

En segundo lugar, desde esa fecha se han aplicado sólo seis derechos compensatorios. Hoy en día no existe ninguna medida en aplicación.

Finalmente, debo dejar constancia que de acuerdo con nuestras normas estas medidas sólo pueden aplicarse como máximo por un año, teniendo una cláusula de término automática, sin que sea necesaria ninguna actuación formal de la administración.

15 y 16. Las definiciones y demás aspectos que contiene el "Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias" constituyen desde la fecha de promulgación de los acuerdos, la legislación chilena en estas materias.

17. Sin perjuicio de lo taxativo del párrafo 19.4 del Acuerdo obligatorio en nuestra actual legislación, ya el Decreto N° 575 contemplaba para todas las medidas que pudieran aplicarse que ellas no podían ser superiores "al margen de distorsión de precios" comprobada.

18. En cuanto a la pregunta 18, cabe señalar que los Valores Aduaneros Mínimos no son sustitutos de los derechos compensatorios. Los derechos compensatorios se rigen por el artículo 19.4, en cuanto al monto de los mismos.

19. Respecto de esta materia no existe actualmente una normativa explícita en la legislación chilena. Sin embargo, mientras se estudia la nueva normativa consistente con el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo, nos atendremos estrictamente a lo que señala el artículo 14 del Acuerdo.

20. La legislación chilena ya hizo suyas las definiciones del "Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias", y no contempla innovar sobre estas materias. Sin perjuicio de ello, la Comisión, en el transcurso del procedimiento indagatorio, debe identificar la naturaleza del subsidio de que se trata. De cualquier manera los subsidios no recurribles no podrán ser objeto de derechos compensatorios.

Procedimientos

21. Conforme a la normativa vigente y desde el 17 de mayo de 1995, la Comisión verifica en forma previa al inicio de una investigación el grado de representatividad de conformidad con los artículos 5.4 y 11.4. de los respectivos Acuerdos. Actualmente, en el hecho, la Comisión así lo ha estado haciendo.

22 y 26. Mientras se dicta la nueva reglamentación que precise lo que dice relación con la duración del procedimiento y los plazos contemplados, la Comisión cuidará de respetar la obligación de no imponer medidas provisionales antes de los 60 días de iniciada la investigación.

23. Este plazo será especificado en el reglamento que se encuentra en estudio, se tendrá especial cuidado en notificar con la debida antelación al inicio de las investigaciones por dumping y de invitar a celebrar consultas antes del inicio de investigaciones por subsidios. En ambos casos los plazos involucrados serán los que se consideren como suficiente para cumplir con las señaladas obligaciones.

24. Se notifica por medio de avisos en el Diario Oficial y a través de cartas dirigidas a los exportadores conocidos al momento de iniciarse la investigación, importadores, otros productores, usuario del producto investigado, y a asociaciones gremiales cuando corresponda. Antes de iniciar una investigación por subvenciones la Comisión se comunica con el Gobierno del país extranjero de origen del producto denunciado, a fin de dar oportunidad de celebrar las consultas previas requeridas.

25. El reglamento (Decreto N° 575) que regía las investigaciones por subsidios y dumping contemplaba específicamente esta materia; desde el 17 de mayo de 1995 se aplica la normativa más detallada que contienen los artículos 6.5 y 12.3 de los Acuerdos respectivos.

27. La Comisión pondrá término inmediato a la investigación, en cualquier momento cuando, a su juicio, de los antecedentes no es posible desprender la existencia de distorsiones en los precios o que éstas no ocasionan grave daño actual o inminente a la producción nacional. Por lo tanto, la Comisión pondrá término a una investigación, también en cuanto compruebe que los márgenes de dumping son *de minimis*, o bien, cuando el volumen de las importaciones con dumping o el daño sean insignificantes.

28. Estas definiciones y conceptos al estar contenidos expresamente en los Acuerdos forman parte en consecuencia, de la legislación chilena actualmente vigentes.

29. No se responde. No hay una definición de política en Chile respecto de esta situación.

30. Las medidas provisionales procuran prevenir un grave daño, nuestras normas no contemplan medidas provisionales con carácter retroactivo.

31. No se proyecta aplicar este tipo de situaciones en la normativa chilena.

32. Como hemos señalado anteriormente, el documento mencionado es sólo una referencia. Cabe destacar que la norma chilena contempla un formulario en el que las partes interesadas deben entregar los antecedentes requeridos para la presentación de su denuncia.

A lo largo de la investigación la Secretaría Técnica de la Comisión puede solicitar antecedentes adicionales a las partes interesadas.

33 y 34. Las disposiciones aludidas en dichas preguntas son norma vigente en Chile, en consecuencia se aplican actualmente.

35. El Anexo II del Acuerdo Antidumping es parte de la normativa vigente. La reglamentación chilena contempla la posibilidad de entregar antecedentes adicionales o corregir información ya entregada durante la investigación y con posterioridad a la misma.

36 y 37. El Anexo II del Acuerdo Antidumping es parte de la normativa vigente. En el curso de la investigación la Secretaría Técnica de la Comisión utiliza la información proporcionada por las partes interesadas y recaba antecedentes de todas las fuentes pertinentes y disponibles que aseguren un resultado objetivo y transparente de la misma.

38 y 39. El propio artículo 18 señalado en la pregunta indica que la recomendación podrá hacerse cuando "disponga de antecedentes para ello". Agrega que para efectuar esta recomendación deberá oír a los interesados.

40. Para cumplir las obligaciones previstas en el artículo 9.3.2 se requiere de implementación y esto es materia del proyecto de normativa en estudio.

41. La normativa chilena notificada no contempla ese tipo de investigaciones, no obstante al estar previstas en los Acuerdos, Chile está obligado a reglamentarlas y realizarlas de conformidad con los mismos.

42. En caso que existan dudas sobre el origen de las mercaderías, la Aduana está facultada para hacer aforo físico y/o solicitar un certificado de origen.

Revisión judicial

43 a 46. En la actualidad, no hay tribunales o procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales, destinados especialmente a la revisión judicial de las medidas administrativas vinculadas a las determinaciones definitivas en materias de derechos compensatorios y antidumping. No obstante, excepcionalmente, los interesados han utilizado en dos oportunidades un recurso de carácter constitucional denominado "recurso de protección", al cual se puede acoger cualquier persona nacional o extranjera, natural o jurídica, que considere conculcadas o amenazadas sus garantías constitucionales. Chile deberá establecer un sistema específico para la revisión judicial, que puede tener este carácter, o bien, tratarse de una instancia administrativa o arbitral, de acuerdo a las nuevas disposiciones de los acuerdos respectivos.

Determinación de daño

48. En la legislación chilena se comprende que el daño puede ser efectivo (actual) o inminente (amenaza). En ambos casos, debe ser grave.

49. Beneficios, ver definición del artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping.

50 a 59. En todas aquellas preguntas en que se hace referencia a la "Guía" de la Comisión de distorsiones (50 a 59) cabe recordar que ese documento tuvo por objeto servir como un medio de divulgación y sólo proporciona una descripción general acerca de las materias que son de competencia de la Comisión, como son las referidas a sus funciones, estructuras y condiciones necesarias para que ésta adopte una decisión destinada a corregir una distorsión.

La determinación de daño o amenaza de daño se basa en los artículos correspondientes de los Acuerdos Interpretativos del artículo VI y de Subvenciones y Derechos Compensatorios (artículo 3 del Acuerdo Antidumping y artículo 15 del Acuerdo sobre Subvenciones).

Los elementos que se consideran para establecer lo más objetivamente posible la existencia de daño y amenaza de daño son los listados en los acuerdos y consideran entre otros, la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios (o utilidades), el volumen de producción, la participación en el mercado, de las importaciones y de la industria nacional, la productividad, el rendimiento de las inversiones, o la utilización de la capacidad, los factores que afectan a los precios internos, la magnitud del margen de distorsión (dumping o subsidio), las existencias, el empleo y otros que permitan dar una visión completa de la situación del sector.

En el análisis de la relación causal entre la existencia de dumping o subsidios y el daño o la amenaza de daño, se utilizan instrumentos estadísticos y análisis económicos que permiten identificar la importancia de los elementos causantes de la situación actual que enfrenta la producción nacional. Evidentemente, que estos instrumentos no siempre entregan todas las respuestas pero permiten focalizar las decisiones de la Comisión.

Asimismo, no siempre los antecedentes estadísticos se encuentran disponibles por lo que no es posible utilizar siempre las mismas técnicas y los mismos criterios. En estos casos, la Comisión debe ser flexible, el grado de flexibilidad está limitado por las obligaciones de Chile que derivan de los Acuerdos respectivos de la OMC, de la reglamentación que se encuentra en estado de elaboración y por los principios jurídicos chilenos que los complementan (tales como derechos fundamentales que garantiza la Constitución).

60. La definición de parte interesada es la que contienen los respectivos Acuerdos, ver artículos 6.11 y 12.9. Se tiene un criterio no restrictivo del término, lo que permite asegurar una amplia participación durante el proceso de investigación, por ejemplo, de usuarios industriales de los productos investigados.

61. Todas las partes tienen derecho a revisar la información no confidencial de conformidad con los artículos 6.4 y 12.3, de los respectivos Acuerdos.

62. La ley notificada señala que antes de resolver, la Comisión deberá recibir en audiencia a las partes interesadas cuando éstas lo soliciten, para escuchar sus planteamientos. En la reglamentación en estudio se contemplarán los procedimientos para implementar la obligación de informar los hechos esenciales de conformidad con los artículos 6.9 y 12.8, respectivamente, normativa vigente en Chile desde el 17 de mayo de 1995.

63. Las disposiciones de los artículos 12.2.2 del Acuerdo Antidumping y 22.5 del Acuerdo sobre Subvenciones son la normativa vigente en Chile, por lo que en las investigaciones sobre derechos compensatorios y derechos anti-dumping se aplican estas disposiciones. En las Actas públicas de la Comisión figuran, entre otros, una exposición razonada de la investigación, las presentaciones de las partes interesadas, así como los argumentos y fundamentos que respaldan las decisiones de los miembros de la Comisión. Por último, incluye la recomendación de la Comisión al Presidente de la República.

64. La normativa vigente en Chile contempla la disposición de acumulación prevista en el artículo 3.3 del Acuerdo Antidumping y 15.3 del Acuerdo sobre Subvenciones.

RESPUESTAS DE CHILE A LAS CUATRO PREGUNTAS ESTADOUNIDENSES
ENVIADAS MEDIANTE NOTA DEL 27 DE JULIO DE 1995

Respuesta N° 1

En el sistema legal chileno, un tratado debidamente suscrito por el Poder Ejecutivo, aprobado por el Congreso Nacional y cumplidos los requisitos de promulgación y publicación -sin perjuicio de la pertinente ratificación- se incorpora al orden jurídico interno con el valor de una ley.

La Constitución Política de la República establece en el artículo 32 N° 17 que son atribuciones especiales del Presidente de la República "conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales y llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que estime conveniente para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 50 N° 1".

Por su parte, el artículo 50 de la Constitución dispone que son atribuciones exclusivas del Congreso: "1) aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado se someterá a los trámites de una ley. Las medidas que el Presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de materias propias de ley".

La incorporación de los tratados al derecho interno con la jerarquía de ley se desprende de las normas constitucionales arriba señaladas, y así también lo entiende la doctrina y lo confirma numerosa jurisprudencia. Dado que el tratado pasa a tener dentro del orden jurídico chileno el valor de ley, tendrá carácter obligatorio y, en consecuencia, debe ser aplicado por los tribunales de justicia y las autoridades administrativas sujeto a lo que se señala más adelante en relación con las normas autoejecutables.

Para ser aprobado por el Congreso el tratado debe someterse a los trámites de una ley. Debe cumplirse el quórum que exige el artículo 63 de la Constitución: la mayoría de los miembros presentes de cada Cámara. Sin embargo, si el tratado modifica o deroga una norma que tenga el carácter de ley orgánica constitucional se requiere el voto favorable de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio y en el caso de una ley de quórum calificado la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.

Para que un tratado aprobado por el Congreso se incorpore al sistema jurídico chileno, se requiere que sea promulgado mediante decreto supremo firmado por el Presidente de la República y el o los Ministros de Estado correspondientes, el que debe someterse al trámite de Toma de Razón ante la Contraloría General de la República y publicarse en el Diario Oficial.

En un tratado pueden existir normas de efecto inmediato o autoejecutables (self-executing) que obligan automáticamente al Estado y conceden derechos a los particulares. Pueden también existir normas que requieran para su aplicación en el país, la dictación de una norma legal o una norma administrativa (decreto o reglamento del Poder Ejecutivo). La razón de lo anterior reside en el hecho que en muchas normas de un tratado las partes se comprometen u obligan a realizar ciertas actuaciones o tomar ciertas medidas. Para determinar si las normas de un tratado son o no autoejecutables deberá principalmente analizarse la redacción de su texto y la naturaleza de su contenido. Que la norma que deba dictarse sea de carácter legal o administrativo dependerá de cada caso: el establecer una sanción o crear un organismo público exigirá ley (artículo 60 de la Constitución Política).

La aplicación por vía administrativa de una norma de un tratado puede hacerse, en cambio, a través de la dictación de un reglamento, de un simple decreto o de instrucciones, ya que todas estas disposiciones pueden ser dictadas por el Presidente de la República en ejercicio de la potestad reglamentaria que le confiere el número 8 del artículo 32 de la Constitución Política.

El tratado al tener el valor de ley y ser incorporado al sistema legal chileno, deroga normas existentes que sean contrarias. Opera la derogación tácita regulada en el Código Civil, artículo 52. La derogación es tácita "cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior". El artículo 53 por su parte dispone que "la derogación tácita deja vigente las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, en todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley". Así lo confirma la jurisprudencia de los tribunales y la doctrina.

Como ya se expresara precedentemente, la aplicación interna de los tratados dependerá de la obligación contenida en la norma específica del tratado y de su naturaleza. Así, una obligación de establecer un recurso de revisión es materia de ley. Al respecto es importante tener presente el artículo 60 de la Constitución que señala qué materias deben ser reguladas por ley.

Sin perjuicio de reiterar que el texto de los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio es ley vigente en Chile, el Gobierno está elaborando un proyecto de ley que, modificando lo pertinente de la Ley N° 18.525, consagre específicamente, al tenor de los Acuerdos, la estructura, composición y atribuciones de la instancia de revisión de las decisiones de la autoridad investigadora y aquellas normas de procedimiento no explícitas en los Acuerdos, todo lo cual deberá hacerse en consonancia con la estructura de nuestros procedimientos administrativos.

Asimismo, se encuentra en proceso de elaboración un reglamento que precise todos aquellos aspectos menores de procedimiento que garantice su transparencia y las formas precisas de llevar a cabo, en el ámbito interno de la Comisión (autoridad investigadora), las formas de cálculo, ajustes, fuentes de antecedentes relevantes y otros aspectos que tiendan a facilitar el acceso a los mecanismos que contemplan los citados Acuerdos.

Con fecha 17 de mayo de 1995, fue publicado en el Diario Oficial el Decreto Supremo N° 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual tuvo por objeto promulgar el "Acuerdo de Marrakech" por el que se establece la Organización Mundial del Comercio y los Acuerdos anexos, entre los que cabe destacar, el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.

El "Acuerdo de Marrakech" es un tratado internacional suscrito y ratificado por la República de Chile. Ahora bien, para que un tratado internacional tenga vigencia en el derecho chileno, requiere, además de los actos de suscripción y ratificación, encontrarse debidamente incorporado a nuestro derecho interno.

Asimismo, el propio Decreto Supremo N° 16, que promulga los "Acuerdos de Marrakech" dispone que los Acuerdos contenidos en él deberán cumplirse y llevarse a efecto como ley. Desde el momento de la publicación en el Diario Oficial del mencionado tratado, éste derogó disposiciones de la Ley N° 18.525, en todas aquellas materias en las cuales existe contradicción entre ambos textos, entendiéndose vigentes todas las disposiciones que se refieren a materias no tratadas en los Acuerdos respectivos.

Es necesario señalar que algunas de las disposiciones del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y del Acuerdo sobre

Subvenciones y Medidas Compensatorias, requieren de su implementación a través de la correspondiente normativa tanto legal como reglamentaria.

Respuesta N° 2

En caso que con posterioridad a los Acuerdos se dicte una ley que contenga normas discrepantes con ellos, este conflicto debe resolverse sobre la base de las reglas y principios de la interpretación de la ley que encierra el Código Civil y que son valederas respecto de toda norma jurídica. En general, si existen dos normas de igual jerarquía (tratado y ley) que versan sobre igual materia, la ley posterior deroga la anterior, pudiendo esta derogación ser expresa o tácita. También debe considerarse el principio de la especificidad de las disposiciones según su naturaleza y que se recoge en los artículos 4 y 13 del Código Civil y que se traduce en que las disposiciones de una ley relativas a negocios particulares prevalecerán sobre las disposiciones generales de la misma u otra ley, cuando entre ellas hubiere oposición.

No obstante lo anterior, no puede dejar de mencionarse la posición de la doctrina en la materia. En efecto, sustentándose en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la doctrina sostiene que la primera regla a aplicar frente al conflicto entre el tratado y la ley es aquella que afirma que el intérprete debe tratar de conciliar las normas del tratado con las de la ley posterior. Si ello no fuere posible, hace prevalecer en el orden interno el tratado sobre la ley posterior, sosteniendo la intangibilidad de este último por tratarse de un acto jurídico colectivo que prima sobre el carácter jurídico unilateral que se le asigna a la ley.

En la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República existen dictámenes que, pronunciándose respecto de regímenes de franquicias, han hecho prevalecer las disposiciones de los convenios internacionales respectivos sobre la legislación chilena relativa a las materias, siguiendo el criterio enunciado en el párrafo anterior.

Respuesta N° 3

Si bien el artículo 38 de la Constitución Política faculta a toda persona que se sienta lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las Municipalidades, para reclamar de ello ante los Tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios que causaron el daño, la verdad es que no existe un procedimiento de carácter general que permita hacer efectivo ese derecho.

En cambio, existen procedimientos contencioso-administrativo especiales en numerosas materias que determinan que tribunales conozcan de recursos para impugnar determinadas resoluciones de la administración en materias tributarias, aduaneras, sanitarias, etc.

A su vez, el número 14 del artículo 19 de la misma Constitución asegura a todas las personas el derecho de petición ante cualquiera autoridad y el artículo 9 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, establece que respecto de todo acto administrativo siempre se puede deducir un recurso de reposición ante la misma autoridad y el de apelación, si este último ha sido contemplado en la ley.

A través de esas vías puede sostenerse ante las autoridades judiciales o administrativas, la derogación o vigencia de una ley o disposición de un tratado internacional, según el asunto en que incida ese pronunciamiento.

Asimismo, aparte del mencionado recurso de protección que ampara el ejercicio legítimo de determinados derechos individuales de actos u omisiones arbitrarios e ilegales, el ordenamiento jurídico chileno consulta en la Ley N° 18.971, un recurso judicial especial de amparo económico relativo a la discriminación arbitraria por parte de organismos estatales en la ejecución de actividades económicas que prescribe el número 21 del artículo 19 de la Constitución Política.

Por regla general, no es necesario utilizar o agotar las instancias administrativas para entablar recursos ante los tribunales, salvo que así lo señale la ley, como ocurre en el caso de las reclamaciones en contra de las resoluciones de las Municipalidades.

La única jurisprudencia administrativa con fuerza vinculante es la que emana de los dictámenes de la Contraloría General de la República que son obligatorios en los casos a que ellos se refieren para toda la administración, pero pueden ser revisados por ese mismo organismo.

Las sentencias judiciales sólo tienen efectos respecto del caso particular sobre el que se pronuncian y sólo afectan a las partes del juicio correspondiente.

Respuesta N° 4

Tal como se ha informado anteriormente, el Gobierno de Chile está estudiando modificaciones a la normativa de la Ley N° 18.525 a la luz de los Acuerdos de la OMC. La nueva legislación deberá ser compatible con los Acuerdos.